

Miguel Rodríguez Muñoz

Normalización del saqueo

(Página Abierta, 246, septiembre-octubre de 2016).

Durante los meses de julio o agosto, cuando por H o por B entro en un establecimiento de El Corte Inglés, suelo experimentar enojo al observar ese despliegue de publicidad que, metiéndole tijera al período estival, anuncia la próxima «Vuelta al cole», como si se tratara de un suceso que a todos nos apura y llena de contento. Me imagino en la piel de un estudiante, inmerso en un tiempo de descanso que adivina interminable, gozando de un verano cuyo horizonte intuye lejano, y llega el Corte Inglés, como ese mal que siempre acecha, con la advertencia de que *tempus fugit*, la fiesta se acaba y ahí está, doblando la siguiente esquina, el largo invierno con sus madrugones, horarios de clase y tareas escolares y de que en consecuencia padres e hijos deben darse prisa para adquirir mochilas, libros de texto, cuadernos, reglas, cartabones y rotuladores, puestos a la venta en las estanterías de la correspondiente sección, porque, más allá del alborozo y el desenfadado lenguaje con que se designa la cercanía del curso lectivo, se trata de hacer caja, mucha caja.

Pero, a decir verdad, esa manipulación que el marketing hace de familias y escolares es peccata minuta en comparación con el maltrato que ciudadanos y ciudadanas recibimos de las poderosas compañías que nos venden energía eléctrica, combustible, telefonía, servicios financieros, seguros, vivienda, etc. o gestionan servicios públicos privatizados.

Si el sesgo capitidismínido de nuestro estatus como ciudadanos o el papel subordinado de las mujeres en la vida social o la violencia de género o la explotación, desempleo y precariedad tan arraigados en el mundo del trabajo son objeto de reflexión y debate público, animan movimientos sociales e inspiran, con mayor o menor fortuna y grado de compromiso, reivindicaciones y programas de Gobierno, la condición de consumidor expoliado y ninguneado por los grandes actores económicos, tal vez por tratarse de un problema de otra naturaleza y entidad, pasa desapercibida y se halla, en todo caso, fuera de la agenda política, dejada de la mano de Dios, regulada por una normativa laxa, escasamente protectora de unos individuos gibarizados.

Esa sistemática e institucionalizada estafa como usuarios de servicios públicos carece de toda relevancia: constituye un fenómeno rutinario, un trozo del paisaje habitual cuya degradación no suscita polémica, quizá porque los afectados, más que un grupo social, constituimos una masa amorfa, transversal, mosqueada, pero carente de ningún potencial emancipatorio. Solo la lucha antidesahucios o la denuncia de la pobreza energética, como antaño sucedía con las protestas por la subida del precio del pan o la carestía de la vida, hacen cuestión de ese negocio tan asimétrico entre vendedor y comprador cuando produce efectos dramáticos.

Y, sin embargo, en el ámbito de nuestra privacidad, los ciudadanos nos enfrentamos cada día a un complejo mundo de relaciones mercantiles con empresas suministradoras de servicios públicos, ligadas entre sí por vínculos oligopólicos, en el que primero se nos tima sobre el contenido del contrato (letra pequeña, conceptos técnicos opacos, grabaciones en poder de una sola de las partes), después se nos roba en el pago de las prestaciones (sobrevvenida temporalidad de las ventajas prometidas, facturas en las que el consumo es una variable menor, derramas, comisiones, etc.) y finalmente se nos deja desarmados (siempre con la posibilidad de protestar llamando a un gravoso 902 atendido por una máquina) en la defensa de nuestros derechos e intereses, todo ello favorecido por unas tecnologías de la información que permiten levantarnos la cartera con una limpieza que para sí quisiera el más profesional de los descuideros.

Las expectativas racionales de los agentes y los mercados eficientes, esos axiomas del neoliberalismo que explican cómo, bajo condiciones de máxima libertad, los mercados reparten beneficios para todos, toman cuerpo en nuestra vida cotidiana en un contumaz, formidable y normalizado saqueo. Está –hay que reconocerlo- muy bien pensado.